

El movimiento obrero y el Estado en la lucha por un Zimbabwe democrático

Patrick Bond y Richard Saunders

Cuando Zimbabwe alcanzó su primer Gobierno independiente en 1980, liderado por el presidente Robert Mugabe y los luchadores por la liberación del Frente Patriótico de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe (ZANU-PF en sus siglas inglesas), había razones que alimentaban la esperanza de un brillante futuro. El nuevo país heredaba importantes infraestructuras del anterior régimen de colonos de Rhodesia, incluyendo unos sistemas de transportes y comunicaciones relativamente nuevos y un impresionante conjunto de industrias de sustitución de importaciones. La economía se había construido contando con el apoyo y la planificación del Estado (junto al control del capital) para eludir las sanciones de la ONU. Para reconciliarse, Mugabe fomentó las buenas relaciones con el capital local y regional, al tiempo que establecía lazos económicos con China y los países del bloque del Este que habían apoyado la lucha por la liberación. Aproximadamente 100.000 colonos blancos permanecieron en el país, ocupando los más altos cargos del comercio, las finanzas, la industria, la minería y la agricultura de gran escala, así como pequeños negocios domésticos. Al principio, los años de 1980 fueron testigos de un rápido creci-

• Artículo publicado en *MR*, vol. 57, nº 7, diciembre de 2005, pp. 42-55. Traducción de Ricard Gil. Patrick Bond es director del Centro para la Sociedad Civil en la Universidad de KwaZulu-Natal en Durban, <http://www.ukzn.ac.za/css>. Dos de sus artículos sobre Zimbabwe han aparecido en *Monthly Review*, «Zimbabwe, South Africa and the Power Politics of Bourgeois Democracy» (abril de 2002) y «Political Reawakening in Zimbabwe» (abril de 1999). Richard Saunders es profesor de ciencias políticas en la Universidad York de Toronto. Es autor de *Never the Same Again: Zimbabwe's Growth towards Democracy, 1980-2000* (Harare, ESP, 2000) y *Dancing Out of Tune: A History of the Media in Zimbabwe* (Harare, ESP, 1999).

miento, al que siguió un periodo de sequías, con un 5% de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) cuando las estaciones lluviosas eran normales o especialmente generosas. Gracias a la construcción de miles de nuevas clínicas y escuelas, los índices de salud y educación experimentaron una notable mejoría.

Pero 1991 representó un punto de inflexión para Zimbabwe, como lo fue para Irak, la Unión Soviética, Argentina, India, Cuba y otros lugares. De pronto, los Estados Unidos eran la única superpotencia, y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, y el Tratado General sobre Aranceles y Comercio (más tarde Organización Mundial de Comercio) no perdieron tiempo en imponer su pie de hierro neoliberal a nivel global. Zimbabwe tenía importantes deudas internacionales y, de pronto, el pago de los intereses de las nuevas deudas quedaba «condicionado» al hecho de ceder a la dictadura neoliberal global. El importante sector estatal y las industrias locales protegidas heredadas del régimen anterior quedaron condenados por «ineficientes» y Mugabe adoptó con considerable entusiasmo un Programa de Ajuste Estructural Económico (ESAP en sus siglas inglesas). El resultado fue desastroso. La industria manufacturera sufrió un descenso del 40% entre 1991 y 1995, acompañada por un declive similar en el nivel de vida real de los trabajadores y un incremento radical de la inflación que hizo estragos en los ahorros y en los trabajadores de la economía informal. El hambre asoló el campo. La educación pública y los gastos sanitarios se redujeron justo cuando la epidemia del SIDA azotaba el país. La tasa de infección del virus HIV entre los adultos es superior al 20% y, según cifras oficiales, cerca de 5.000 personas mueren cada semana por enfermedades relacionadas con el SIDA. Más de mil maestros de escuela han muerto de SIDA desde mediados de 2004, y el sindicato de profesores informa que el 25% de sus afiliados está infectado. Una gran mayoría ya no puede permitirse la terapia antirretroviral subvencionada por el Estado, que, de todos modos, sólo se encuentra disponible en los dos centros urbanos más importantes. Las divisas escasean y, con la industria doméstica destruida por el ESAP en los años noventa, muchos bienes de consumo, como la gasolina o las compresas, a menudo son imposibles de conseguir. Zimbabwe, que llegó a ser autosuficiente en la producción de cereales, se ha visto obligado ahora a importar de donantes cantidades masivas de estos para evitar la inanición total en las zonas rurales. Durante toda esta pesadilla, el agotado régimen nacionalista del ZANU-PF de Mugabe se ha aferrado al poder, demasiado enfermo para contener el declive acelerado pero, aun así, demasiado fuerte para morir.

Desde la introducción del ESAP, los trabajadores de la decreciente economía organizada de Zimbabwe y, especialmente, la oficina central del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU en sus siglas inglesas) han sido el centro de gravedad de la oposición política del país. En las elecciones, el régimen de Mugabe recurre al fraude flagrante, a la política de influencias y a una represión brutal. A medida que la economía se desintegraba, el régimen respondió a las consecuencias (como el éxodo del campo a las ciudades) mediante el uso de la

fuerza. La Operación *Murambatsvina* —«limpieza de basura»—, de mediados de 2005, fue uno de los ejemplos más extremos y provocó el desarraigo de cerca de 300.000 familias urbanas que, sin previo aviso y en pleno invierno, eran como sus casas de los distritos segregados y sus puestos en los mercados eran arrasados, después de lo cual fueron abandonados en el campo.

Aunque el número de afiliados al ZCTU ha oscilado entre apenas 150.000 y 200.000 (aproximadamente el 15% de la fuerza de trabajo ocupada) en un país de unos 12 millones de habitantes, el movimiento obrero es hoy en día la fuerza no estatal más poderosa de la sociedad. Como sucedió en la norteña Zambia durante los últimos años de 1980 (concluyendo con un cambio de gobierno en 1991) y en Sudáfrica entre mediados de la década de 1980 y mediados de la de 1990, las organizaciones obreras todavía podrían jugar un papel decisivo en la lenta y dolorosa democratización de esta sociedad. Por otra parte, al anticipar una alternativa antineoliberal desesperadamente necesaria, una alianza de izquierdas entre el movimiento obrero y los emergentes movimientos sociales de Zimbabwe sigue siendo la única esperanza que existe para lograr una salida verdaderamente democrática del desastre.

A lo largo del periodo posterior a 1991, el ZCTU ha oscilado entre, por una parte, la oposición al neoliberalismo, y por otra, los pactos electorales anti-Mugabe con sectores pequeño-burgueses que pedían abiertamente unas medidas neoliberales todavía mayores. Nos espera un periodo crucial, durante el cual el ZCTU podría volver a verse tentado a morder el anzuelo del corporativismo. La posibilidad de un pacto de personalidades dentro de la élite política pequeño-burguesa, que combine a los «moderados» del partido gubernamental con el gravemente escindido Movimiento para el Cambio Democrático de la oposición, se presentará cuando se ponga fin, antes de las elecciones presidenciales previstas para 2008, al cuarto de siglo de dominio de Robert Mugabe, de 81 años, en parte por el presidente de Sudáfrica Thabo Mbeki. (La oposición se divide entre participar o no en las elecciones de noviembre para elegir un nuevo Senado, con el bloque obrerista defendiendo un boicot en protesta por la ilegitimidad del Senado y las tácticas electorales fraudulentas de Mugabe.) A Mbeki también debe preocuparle el papel potencialmente paralelo del Congreso de Sindicatos de Sudáfrica (COSATU en sus siglas inglesas), que el año pasado se embarcó en una ofensiva de solidaridad con el ZCTU que lo situó en conflicto directo con el Congreso Nacional Africano (CNA) de Mbeki. En Zimbabwe, el peligro reside en que tanto las élites políticas ya establecidas como las de reciente aparición buscan una transición a un gobierno post-Mugabe que implicará la marginalización del sector popular.

Desafíos democráticos, respuestas del Estado

Desde la independencia formal de Zimbabwe en 1980, la mayor parte de trabajadores y habitantes pobres de las ciudades han llegado a comprender y a criti-

car el agotamiento de la posición moral del movimiento de liberación nacional, la zigzagueante política económica del Estado, el mal gobierno del partido dominante y las inclinaciones dictatoriales de Mugabe. Los trabajadores no fueron tan importantes como la guerrilla para terminar con la dominación colonial de Rhodesia en 1980, aunque votaran abrumadoramente por el ZANU-PF, incluso por encima de la Unión Popular Africana de Zimbabwe liderada por el difunto Joshua Nkomo, el primer líder sindical nacional del país. Ello se debió a la mayor presencia militar de la guerrilla a lo largo y ancho del país y a lazos lingüísticos y culturales muy arraigados. La luna de miel terminó casi de inmediato, cuando Mugabe conspiró con Harry Oppenheimer, director de la Anglo American Corporation, para aplastar las huelgas de la mina de carbón de Hwange y en las plantaciones de azúcar de la compañía pocas semanas después de la independencia. Poco después, Mugabe tildó de «prácticamente delictiva» una huelga de trabajadores de panaderías, al tiempo que frenaba las peticiones de cambio potencialmente explosivas en las ciudades.

El movimiento obrero, que había sido foco de conflictos y competencia entre facciones durante la última época del periodo colonial, se convirtió en un blanco clave de la reestructuración política del ZANU-PF poco después de 1980, tras una serie de acciones obreras generalizadas que a menudo fueron reprimidas violentamente. En 1981, el partido dirigente impuso el control institucional sobre el movimiento obrero por medio de la unificación de las organizaciones de trabajadores ya existentes con el ZTCU y manipulando las posiciones claves de liderazgo. Degradado por la intervención política directa, un liderazgo sindical incapaz de rendir cuentas y un régimen laboral cada vez más hostil, el nuevo centro sindical nacional quedó aplastado a mediados de los años de 1980 bajo el peso de la corrupción, los conflictos entre facciones políticas y una impopularidad creciente entre los trabajadores, que veían como la organización, atrapada políticamente, no producía resultado alguno. Un factor significativo fue la aparición de una nueva generación de activistas sindicales que fueron alcanzando lentamente posiciones de autoridad y que se hallaban en condiciones de exigir una mayor transparencia ante los trabajadores. En 1987 había surgido ya un nuevo liderazgo de las filas de los afiliados al centro sindical, entre ellos el secretario general del ZCTU Morgan Tsvangirai, del sector minero, y el presidente Gibson Siganda, del sector ferroviario.

Lentamente, el ZCTU comenzó a cultivar un cierto grado de autonomía respecto al partido dirigente, lo que se reflejó en la formación de alianzas públicas con otros grupos —especialmente de estudiantes— para cuestionar al Estado por la desaparición de los valores progresistas y por las primeras revelaciones de corrupción en el partido dirigente y entre los funcionarios civiles. Aunque el ZANU-PF mantenía la pretensión retórica de un programa de desarrollo socialista, este presentaba pocos puntos serios de conflicto. Sin embargo, con el viraje del partido hacia la derecha a finales de los años de 1980, confirmado

por la adopción total del ESAP, la creciente autonomía del movimiento obrero, la popularidad entre sus bases y su vociferante escepticismo frente al reajuste empezaron a representar un obstáculo importante para el ZANU-PF.

Ya en 1989, Tsvangirai fue encarcelado brevemente tras apoyar las ruidosas protestas estudiantiles contra la corrupción del Gobierno y la influencia de las corporaciones multinacionales. A medida que el reajuste estructural iba causando cada vez mayores estragos, Mugabe introducía leyes laborales que restringían severamente las negociaciones colectivas y otras actividades sindicales. El Gobierno utilizó a las fuerzas de seguridad para abortar manifestaciones pacíficas contra el reajuste estructural y las leyes laborales. Se iniciaba una década de acciones industriales y sociales sin precedentes, incluyendo una ola de acciones industriales en los sectores público y privado a mediados de los años de 1990 que no tardaron en incluir «acciones políticas» de ámbito nacional contra la intransigencia, la falta de transparencia y la mala administración del Gobierno.

En lo que fueron las primeras huelgas nacionales desde 1948, el comercio y la industria quedaron detenidos en tres ocasiones durante 1997 y 1998. En diciembre de 1997, más de un millón de trabajadores, directivos, empresarios del sector informal y funcionarios abandonaron sus puestos de trabajo y se unieron a las manifestaciones callejeras para protestar contra los nuevos impuestos fijados por el Gobierno para cubrir los costes no presupuestados de un enorme y secreto acuerdo económico entre el presidente Mugabe y los «veteranos de guerra», un gesto provocado por las revelaciones públicas de casos de corrupción política al más alto nivel en la apropiación de un fondo compensatorio por heridas de guerra para los veteranos. Las posteriores huelgas de 1998 tuvieron el mismo éxito y atrajeron un apoyo de amplia base de la mayoría de grupos de interés sociales y económicos. Una vez más, el partido del Gobierno y sus aliados respondieron con el uso de la violencia, respaldada por una postura cada vez más excluyente y nacionalista. En diciembre de 1997, Tsvangirai sufrió un grave ataque en su despacho por presuntos militantes del ZANU-PF, y en marzo de 1998 las oficinas del ZCTU en Bulawayo fueron bombardeadas.

Los «disturbios del FMI» fueron moneda común en Harare durante los años de 1990, como en tantos otros lugares del Tercer Mundo. Finalmente, activistas de numerosos sectores de Zimbabwe —trabajadores creativos, ONGs, movimientos sociales, mujeres, jóvenes, estudiantes, la Iglesia, los medios de comunicación— se unieron en busca de una acción programática en la convención «Agenda Nacional de los Trabajadores por el Cambio» de febrero de 1999. De este seminal encuentro surgió una plataforma progresista que motivó a sus principales participantes a formar un nuevo partido, pronto conocido como el Movimiento para el Cambio Democrático (MDC en sus siglas inglesas). Pero pocos meses después de su creación en septiembre de 1999, el

MDC dejaba entrever algunas ambigüedades. Por una parte, Tsvangirai trabajaba duramente para construir estructuras locales. Por la otra, el MDC atraía fondos y apoyos de las élites negras pequeño-burguesas y las élites blancas, y encontraba dudosos aliados internacionales.

En muchos aspectos, la política contemporánea de Zimbabwe data del momento fundamental de febrero de 2000 en que una alianza de diversas organizaciones de la sociedad civil, incluidos el ZCTU y sus aliados de la Asamblea Constitucional Nacional, derrotaron al Gobierno en un referéndum constitucional. Fue el primer referéndum en la historia del país, y la primera derrota del ZANU-PF en una votación nacional. Los resultados conmocionaron a la clase dirigente y, con las elecciones de junio de 2000 en el horizonte, precipitaron una serie de acontecimientos profundamente desestabilizadores, entre ellos la invasión por parte de los veteranos de guerra de granjas comerciales propiedad de colonos blancos y, finalmente, de minas y otras empresas de producción. Desde entonces, las instituciones del Estado se han visto radicalmente reestructuradas y la militarización de la sociedad ha alterado la propia naturaleza de la alianza de la clase dominante dentro de la jerarquía política, así como el terreno del activismo de la sociedad civil. Es así como han surgido nuevos desafíos para la consolidación de la agenda político-económica del movimiento obrero a partir del año 2000.

La arremetida del Estado contra las estructuras, la dirección y las bases del MDC no eliminó la oposición, pero aun así construyó considerablemente la capacidad del partido sobre el terreno. Algunos observadores se limitan a analizar la política de liderazgo en el seno del MDC y ponen de relieve los importantes peligros para los electores populares que puede conllevar la aparente confusión del MDC a la hora de abogar por la socialdemocracia o el neoliberalismo, así como las divisiones internas entre bloques competidores. Los optimistas responden recordando la naturaleza amorfa de los miembros, las estructuras institucionales y la dirección del partido, así como los continuos debates abiertos que sobre estos temas tienen lugar en el seno del partido. Más importante puede ser la influencia comparativamente grande de las estructuras y miembros sindicales sobre las filas inferiores e intermedias del partido, aunque muchos políticos dirigentes del MDC sean profesionales, sobre todo abogados.

Los observadores de la corriente dominante también tienden a prestar una atención desorbitada a las refriegas por el liderazgo del ZANU-PF, reduciendo a menudo los procesos políticos a lealtades étnicas. Para algunos, el problema de «gobernanza» puede solucionarse supuestamente a través de una transición hacia un liderazgo más moderado del partido gobernante y tal vez, incluso, hacia la integración de fuerzas opositoras en el Gobierno. Esta es una solución largamente perseguida por el gobierno de Sudáfrica, que a su vez da periódicas (falsas) esperanzas a los líderes del MDC de que Mbeki vaya a presionar sustancialmente a Mugabe para que este acepte un trato. Pero, mientras eso sucede,

algunos aspectos fundamentales de la reestructuración del Estado y la sociedad civil que ha tenido lugar desde el año 2000 no han sido captados por la pantalla del radar. La reestructuración política e institucional del Estado, los reajustes constantes de la economía doméstica y el impacto de ambos en el despliegue de fuerzas sociales en la sociedad civil imponen desafíos extremos al movimiento obrero y a cualquier proyecto políticamente progresista a medio plazo.

El antiguo estado a la vez semi-desarrollista y del bienestar de los años de 1980, socavado por el reajuste estructural de la década de 1990, ha quedado desfigurado desde entonces por una irregular militarización. Ello ha conllevado la eliminación o marginalización de funcionarios profesionales del Estado de lugares de mando clave, y el acceso de personal de las agencias de seguridad del Estado y de paramilitares informales a cargos de autoridad pública. Valgan como pruebas el resurgimiento de los veteranos de guerra, invasores de tierras, como grupo paramilitar apoyado por el partido del Gobierno; la reestructuración de mandos locales en el seno de la Policía Republicana de Zimbabwe, que ha entregado los puestos de autoridad a personal ligado al ZANU-PF; el creciente papel del Ejército Nacional de Zimbabwe en la «vigilancia» y represión de las voces opositoras en el mismo Zimbabwe, y la creación de una segunda organización paramilitar, las brigadas de juventudes nacionales. Mediante todos esos instrumentos, la oposición ha sufrido ataques y, en muchas zonas, se ha visto físicamente diezmada. Además, todos esos hechos reflejan la subordinación de las instituciones del Estado a las necesidades políticas a corto plazo de la dirección del ZANU-PF.

La nueva oleada de militarización facilitó el afianzamiento de un control partidista más directo sobre la Administración pública y desprofesionalizó la antes impresionante burocracia del Estado de Zimbabwe. Se han producido numerosos casos de ataques físicos, amenazas e intimidación contra funcionarios, profesionales del sector público (maestros, médicos, enfermeras), magistrados y jueces del Tribunal Supremo, abogados defensores y fiscales públicos, entre otros. Muchas veces —por ejemplo, en la expulsión de sus puestos de administradores del Gobierno de alto rango por parte de los veteranos de guerra, y en los ataques a profesionales legales por parte de seguidores del partido del Gobierno ante la mirada de la policía— parece que uno de los objetivos de toda esa violencia sea poner de relieve el poder irregular del que disfruta el partido del Gobierno y que ejecuta con total impunidad como señal de atención para sus potenciales oponentes. Además, Mugabe ha introducido una serie de leyes extremadamente regresivas para regular los medios de comunicación e información, la libertad de reunión, los modos de financiación y organización de los partidos políticos y, más recientemente, las organizaciones no gubernamentales (ONG). Se han utilizado formas muy partidistas de «justicia» selectiva y estratégica para atacar a la oposición, a los partidarios visibles de esta en la sociedad civil y el terreno más amplio de las comunidades locales.

Aparte de esa ubicua militarización, la capacidad del Estado se ha mostrado débil y desigual. Algunos experimentos dirigidos por el Estado se han llevado a cabo sin la adecuada competencia administrativa. Elementos institucionales clave del primer y modesto proyecto de desarrollo del ZANU-PF —el sistema de sanidad local, las instituciones educativas, las estructuras de consulta locales, etc.— quedaron económica y administrativamente debilitados durante la época de reajuste estructural. Posteriormente, la «limpieza» generalizada de opositores al Gobierno en amplios sectores del sistema educativo —ya que muchos maestros apoyan al MDC— redujo el acceso a las escuelas y la calidad de estas.

Frente a la crisis creciente, los elementos privilegiados del ZANU-PF han adquirido mayor poder en la economía interior. La corrupción estatal a alto nivel existe desde los años de 1980, pero a partir del año 2000 ha empeorado porque el programa «acelerado» de redistribución de tierras conlleva el realojo de bienes de capital agrícola a gran escala en un clima de escasa transparencia y elevado partidismo bajo la dirección del ZANU-PF. Los clientes del ZANU-PF han acumulado grandes beneficios políticos y económicos. Esos beneficios abarcan desde granjas comerciales, antes pertenecientes a blancos (casi el 90% de las granjas pertenecientes a blancos o a empresas han cambiado de manos desde 2000), hasta una parte de la antaño sustancial colección de empresas estatales e infraestructuras públicas, incluidas la red nacional de suministro eléctrico, la telefonía pública y las redes de telecomunicaciones, el monopolio de la radio y la televisión nacionales, el ferrocarril, plantaciones comerciales y terrenos forestales. Varias docenas de empresas estatales importantes fueron señaladas como candidatas a la privatización, pero sólo unas pocas fueron vendidas entonces, de modo más o menos público. Actualmente, en cambio, los bienes clave —entre ellos la energía, las telecomunicaciones y el transporte— están siendo adquiridos silenciosamente por intereses relacionados con el partido del Gobierno a través de medios directos y otras vías como las licencias de acceso especial, el *leasing* o el abuso de información privilegiada.

El carácter opaco del reformado Estado del ZANU-PF deja entrever indicios de hasta dónde llega el despojo de bienes. La liquidación total emprendida por el ZANU-PF ha exacerbado la constante retirada de inversiones a cargo del Estado en instituciones al servicio del sector social, así como la creciente desviación de recursos públicos del gasto social al sector de la seguridad. De este proceso han emergido los miembros de una élite parasitaria de «hombres del maletín», mediante un renovado recrudescimiento de la acumulación primitiva, que supondrá una barrera importante para la agenda de los trabajadores en los próximos años.

Nuevas respuestas populares

Pocos integrantes de la oposición política y social han conseguido tomar plena conciencia de las implicaciones de la transformación estructural del Estado, y

algunos dirían que por una buena razón: los desafíos clave que plantea la transformación del Estado implican la supervivencia misma de la oposición. Sin embargo, el movimiento obrero se encuentra posiblemente mejor situado para resistir a las implicaciones de la continua reestructuración del Estado gracias a su resistencia a la privatización y al apoyo a las demandas populares de restitución de los derechos sociales y económicos. Eso es así tanto en la práctica diaria en el seno del movimiento obrero como en el papel del ZCTU en las coaliciones más amplias de la sociedad civil. Por lo tanto, el movimiento obrero está planificando un terreno y unas estrategias políticas que son independientes, y en ocasiones contrarias, a las del MDC, sobre todo en temas de política económica, donde las facciones del MDC siguen defendiendo todavía las políticas neoliberales.

Al mismo tiempo, el ZCTU ha mostrado una disposición a defender su posición mediante periódicas acciones de masas, a pesar de los continuos ataques del Estado. Pese a mostrar cierta falta de coraje inmediatamente después del robo de las elecciones a la presidencia de 2002, el ZCTU ha liderado o participado posteriormente en una serie de huelgas y manifestaciones, especialmente en los años 2003 y 2004. En solitario y en conjunción con sus aliados cívicos y el sector izquierdista del MDC, el ZCTU continúa representando un problema para el proyecto nacionalista elitista reconfigurado del ZANU-PF y desafía la afirmación del régimen de haber repartido «justicia nacional» durante el programa, económicamente desastroso y políticamente caótico, de redistribución de tierras. Los trabajadores también influyen en el MDC y en los debates de la sociedad civil al insistir en la cuestión de la redistribución, protestar por la reconstrucción del Estado y apoyar la exigencia de unos derechos sociales y económicos más tangibles y populares que los que propaga el partido en el poder.

Como respuesta, el Estado se ha mostrado intransigente, sometiendo a repetidas detenciones, palizas y amenazas (llegando en algunos casos a la tortura) a dirigentes del ZCTU, líderes sindicalistas y activistas. Al mismo tiempo, el Estado está debilitando al ZCTU desde dentro, con sus intentos (la mayoría de ellos infructuosos) de establecer un núcleo opuesto al movimiento obrero y vinculado al ZANU-PF, la llamada Federación de Sindicatos de Zimbabue (ZFTU en sus siglas inglesas). Encabezado durante un tiempo por el prominente veterano de guerra de Harare Joseph Chinotimba, el ZFTU desarrolló pocas estructuras sobre el terreno y en cambio se basó en la violencia, las amenazas y el apoyo estatal para sostener su presencia económica y organizativa. Tomando como presas a los sectores más vulnerables de los trabajadores —la agricultura rural de plantaciones y las minas, por ejemplo— el ZFTU se ganó un acceso irregular a los trabajadores (y a sus ingresos) mediante tácticas de reclutamiento. Sus cuadros incluyen a veteranos de guerra y otros paramilitares relacionados con el ZANU-PF. Parece claro que, sin el apoyo del Estado y los paramilitares, el ZFTU desaparecería.

Las consecuencias a medio y largo plazo de la reestructuración, des-democratización y, en algunos casos, destrucción interior del Estado durante el periodo actual son profundas. Mientras los observadores de la corriente dominante se han centrado en la necesidad de una dirección de transición en el ZANU-PF, la cuestión más sustancial de la forma del estado/sociedad sigue sin plantearse adecuadamente. Aunque algunas veces los líderes del ZCTU hayan buscado auxilio en instituciones corporativistas, estas han hecho oídos sordos sistemáticamente a sus peticiones.

En realidad, el resultado más probable de la trayectoria política actual es un acuerdo que excluya al movimiento obrero. Otras fuerzas de la sociedad civil, carentes de credibilidad y que no representan a un electorado popular identificable, estarán más dispuestas a conceder una transición entre élites que resulte aceptable para la facción dominante de la dirección del partido del Gobierno, los aparatos de seguridad cada vez más poderosos, los círculos de negocios negros y los poderes regionales como Mbeki. Ahí reside el papel crucial de las organizaciones sindicales regionales e internacionales: apuntalar tanto la integridad institucional como la agenda político-económica del ZCTU. ¿Podrá el COSATU, con base en Johannesburgo, iniciar un programa significativo de solidaridad, teniendo en cuenta la alianza formal de la federación con el CNA de Mbeki?

El factor sudafricano

Más allá de momentos coyunturales como las elecciones de marzo de 2005, la forma más destacada en que la influencia de Sudáfrica puede afectar a Zimbabwe puede ser a través de su relación bilateral —al forzar la liberalización económica y la «normalización» política (en palabras de Pretoria)— y, en el terreno diplomático, a través de la Unión Africana. La estrategia político-económica neoliberal de este organismo, la Nueva Asociación por el Desarrollo de África (NEPAD en sus siglas inglesas), fue respaldada por la Administración Bush al tildarla de «filosóficamente exacta». Mbeki y su más próximo aliado, el presidente de Nigeria Olusegun Obasanjo, la crearon en octubre de 2001. En un principio, Mugabe se opuso a la NEPAD al considerarla una importación del proyecto imperialista a África. Pero en menos de un año, Mugabe y su ministro de Asuntos Exteriores, Stan Mudenge, recibieron la visita del ministro de Exteriores de Pretoria, Nkosazana Dlamini-Zuma, y unos días más tarde el ministro de Economía Herbert Murerwa proclamaba en su discurso presupuestario que era «crucial que Zimbabwe siga formando parte de este proceso [el de la NEPAD]».

Como recompensa, en febrero de 2003, Dlamini-Zuma declaró que «nunca criticaremos a Zimbabwe». Dave Malcomson, de la secretaría de la NEPAD, responsable de Coordinación y Relaciones Internacionales, admitía más tarde a un periodista: «Allá donde vamos, nos mencionan a Zimbabwe como motivo para tomarse a broma la NEPAD».

De un modo muy ilustrativo, Mbeki fracasó en su intento de marzo de 2003 de conseguir que Zimbabwe fuera readmitida en la mancomunidad de antiguas colonias británicas, la Commonwealth, tras su suspensión, a raíz de las elecciones de marzo de 2002. Más tarde intentó garantizar que Mugabe fuera invitado a la reunión de la Commonwealth en Abuja en 2003, pero ello sólo le sirvió para perder todavía más terreno entre sus aliados africanos de siempre. Finalmente, Zimbabwe fue suspendida de manera indefinida, lo que conllevó el anuncio inmediato de Mugabe durante un congreso del ZANU-PF de que el país abandonaría la organización. Mbeki, claramente resentido a su regreso a casa, ayudó a elaborar una declaración hecha pública por la Comunidad de Desarrollo Sudafricana más Uganda, quejándose de que algunos miembros de la Commonwealth, a los que no mencionó, eran «desdeñosos, intolerantes y rígidos». A lo largo de 2004 se produjeron otras muestras similares de solidaridad entre Mbeki y Mugabe, que culminaron en noviembre con el veto del representante de Sudáfrica en las Naciones Unidas a una condena de la Comisión de Derechos Humanos al régimen represivo de Zimbabwe.

El caso más sorprendente del apoyo de Pretoria a Harare fue la oferta de un préstamo de 500 millones de dólares el pasado agosto, aparentemente a instancias del Banco Mundial. Una parte importante de ese dinero serviría para pagar al Fondo Monetario Internacional, pues los atrasos que Zimbabwe debía a este organismo alcanzaban los 200 millones de dólares a mediados de 2005. En un principio, Mugabe rechazó la oferta de Mbeki y en su lugar reunió 135 millones de fuentes internas —privando a la mayor parte de la población de gasolina y alimentos importados— para poder depositar una entrega inicial sobre los atrasos.

Dejando a un lado esta política de influencias verticalista e inútil, el acontecimiento reciente más significativo de las relaciones entre Sudáfrica y Zimbabwe ha sido la solidaridad entre trabajadores. Varios líderes del COSATU, llegados a Harare en octubre de 2004 para reunirse con el ZCTU y otros activistas, fueron inmediatamente arrestados, conducidos a lo largo de 600 kilómetros hasta la frontera sudafricana y abandonados en plena noche. La CNA respondió criticando a los líderes sindicales sudafricanos. El principal dirigente de la CNA, Kgalema Motlanthe (antiguo líder minero), dijo: «Han ido con la intención de desafiar las leyes de un país y lo han hecho saber. Eso sirve para vender periódicos, pero tiene muy poco que ver con familiarizarse con la situación». Uno de los principales asesores de Mbeki, Joel Netshitenzhe, ridiculizó el desalojo de la misión investigadora del COSATU: «Si nos dejáramos distraer por los puestos de feria, perderíamos de vista el baile.»

Sin ceder ante las intimidaciones, el COSATU envió una prominente delegación en febrero de 2005, que fue expulsada inmediatamente. «La acción del Gobierno de Zimbabwe confirma los informes que hablan de su desprecio por los derechos humanos y las libertades civiles», declaró el COSATU durante una reunión posterior con el ZCTU en una ciudad fronteriza. «No abandonaremos

a nuestros colegas en Zimbabwe en esta hora de necesidad.» El resultado, a pesar de la histórica oposición de la Liga Juvenil de la CNA —leal en esta cuestión a Mbeki y, por lo tanto, a Mugabe— fue la amenaza del COSATU de levantar barricadas en la frontera entre Zimbabwe y Sudáfrica durante la campaña electoral. La amenaza se redujo a la colocación de una valla durante la campaña para las elecciones de marzo de 2005.

La ambigüedad en el seno de la izquierda independiente de Sudáfrica era similar. Al inicio de una masiva manifestación de casi 20.000 personas contra la Cumbre Mundial de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible en 2002, un líder del Movimiento de las Personas sin Tierra (LPM en sus siglas inglesas) gritó desde el escenario: «¡Viva Robert Mugabe! ¡Viva el ZANU-PF!» ante los aplausos de una nutrida delegación rural. Como respuesta, Trevor Ngwane (sobrino del asesinado líder de la liberación de Zimbabwe Herbert Chitepo), figura clave en el principal movimiento social, radical y urbano del país, el Foro Anti-Privatización (APF en sus siglas inglesas), tomó la palabra: «Aunque nos alegremos de la unidad de los sin tierra, con todos los respetos, no estamos de acuerdo en el tema de Mugabe. Es un dictador y ha matado a muchos habitantes de Zimbabwe». A principios de 2005, el LPM, el APF y el Jubileo de Sudáfrica se embarcaron en una misión investigadora conjunta en Zimbabwe bajo la premisa compartida de que Mugabe era un dictador represivo. Pese a no llegar a ninguna posición de consenso respecto a las elecciones, los movimientos izquierdistas de Sudáfrica están de acuerdo en que es necesario consolidar la solidaridad entre los movimientos sociales urbanos y rurales a largo plazo.

El tiempo dirá si las vallas fronterizas y otros polémicos actos de solidaridad entre trabajadores, en el contexto del continuo reajuste estructural de Sudáfrica, consiguen abrir una brecha entre la CNA y el COSATU, a semejanza de la que se abrió entre el ZANU-PF y el ZCTU a finales de los años de 1990. La mancillada victoria de Mugabe en las elecciones parlamentarias del 31 de marzo de 2005 no hizo más que alimentar el creciente movimiento de solidaridad entre Sudáfrica y Zimbabwe, un movimiento que se ha ganado el apoyo generalizado de una izquierda sudafricana dividida por lo demás en torno a la mayor parte de cuestiones estratégicas.

¿Internacionalismo, de quién?

El propio ZANU-PF se encuentra en plena crisis por el tema del sucesor de Mugabe, como se reflejó en la espectacular purga de febrero de 2005 del antiguo ministro de Información Jonathan Moyo y de una docena de altos cargos políticos en la órbita de este. Las principales tensiones concernían a si el portavoz parlamentario Emmerson Mnangagwa o la ministra de tantos años Joyce Mujuru —esposa del jefe militar de confianza de Mugabe— alcanzarían una de las vicepresidencias. Se impulsó la segunda, a pesar de un intento de conspira-

ción por parte de Moyo. Pero el caos interno del ZANU-PF desbarata la búsqueda desesperada de legitimidad de Mugabe, según el observador socialista Briggs Bomba: «El partido hace todo lo posible por recuperar la confianza del capital internacional y reintegrarse a la “comunidad internacional”. El gobernador del Banco de Reservas, Gideon Gono, encabeza los esfuerzos por liberalizar no sólo el sistema monetario sino la economía en general, y por volver a involucrar a instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial. A nivel político, el partido está suavizando sus ataques a los poderes occidentales, como demuestra el reciente pago de la deuda al FMI.»

En este confuso contexto, no cabe duda de que el mayor desafío al que se enfrenta el movimiento obrero de Zimbabwe es el de sobrevivir para poder seguir luchando en el proceso de fortalecer los lazos con sus aliados de tendencias izquierdistas en organizaciones comunitarias y movimientos sociales. La sociedad va peligrosamente a la deriva y la situación sólo podrá revertirse cuando el movimiento obrero y sus aliados progresistas de la sociedad civil hagan virar firmemente hacia la izquierda la agenda de la oposición.

Durante la breve amenaza de que Zimbabwe pudiera ser expulsado del FMI, una importante figura del MDC creyó conveniente pedir al FMI que impusiera en Zimbabwe «una amplia serie de reformas destinadas a fortalecer el sector privado y los mecanismos de mercado». El MDC se divide, en un nivel superficial, entre participar o no en la política electoral. Pero la división también refleja la incoherente coalición del ZCTU y los izquierdistas de la sociedad civil con élites políticas y neoliberales que buscan sin inmutarse el apoyo de las instituciones de Bretton Woods y los regímenes de Blair y Bush. El objetivo de los poderes imperiales es la creación de una coalición «corporativista» entre el MDC y las figuras «razonables» del ZANU-PF, basada en un programa de «transición entre élites» que reintegre a Zimbabwe al orden mundial establecido por los Estados Unidos y el Reino Unido. Mbeki prefiere que el ZANU-PF mantenga el poder en un régimen post-Mugabe guiado por el bloque comercial que envuelve al banquero neoliberal Gono y potencialmente liderado por el antiguo ministro de Finanzas Simba Makoni.

A finales de octubre de 2005, el ZCTU celebró una reunión directiva. Sus dirigentes decidieron que «la economía basada en el mercado, que ha causado incontables problemas a los trabajadores de Zimbabwe y otros lugares, especialmente a las mujeres y niños, debe de terminar»; que «la integración regional pro-globalización debería de sustituirse por una integración regional basada en la solidaridad, que promueva el desarrollo industrial y proteja la economía nacional de los impactos adversos de la globalización»; y que «es necesario resistir a los esfuerzos por liberalizar la economía a base de negociaciones con el Tratado de Asociación Económica, la Organización Mundial de Comercio y, especialmente, las negociaciones de Doha sobre desarrollo y el próximo 6º Congreso de la OMC a celebrarse en Hong Kong en diciembre de 2005».

Esta declaración de principios es la base del renovado liderazgo social del ZCTU. Las estructuras sindicales tendrán que trascender su capacidad actual de convocar paros masivos periódicos, pero generalmente controlables, y concentrar sus objetivos en las partes más esterilizadas de la capacidad del régimen, sin arriesgarse a quedar decapitados por el ZANU-PF y los paramilitares. Y al incrementar su aportación técnica al trabajo programático de la sociedad civil, el ZCTU tendrá que evitar la tentación de llegar a acuerdos potencialmente corporativistas que puedan recordar a una transición de élites al estilo de Mbeki.

En el horizonte inmediato se dibuja todavía una importante agitación sociopolítica, con una renovada lucha por el control del partido gobernante y de la oposición y la intensificación de un periodo de austeridad cuando termine la época inflacionaria; todo ello en un contexto de acumulación subimperial sudafricana potencialmente voraz.

La solidaridad internacional, ya iniciada por el COSATU, reforzará la capacidad de la clase obrera de Zimbabwe (y de sus aliados de izquierdas en la sociedad civil) frente a la represión legal e ilegal. El éxito final de un movimiento de masas liderado por los trabajadores, a favor de la democracia y contra el neoliberalismo y el imperialismo, tendría unas consecuencias considerables en toda la zona sur de África.